

Domingo 25.03.12
IDEALOPINIÓN  33

EDITORIALES

Período decisivo

Tras el compás de espera electoral y sindical, el Gobierno deberá acometer las medidas económicas pendientes sin dilación

Esta próxima semana, última del mes de marzo, registrará un abigarrado cúmulo de acontecimientos que en cierto modo cerrarán el período inaugural de la legislatura, dando paso a la plena normalidad de una nueva y decisiva etapa. El Gobierno ya no tendrá inconvenientes ni pretextos para acometer las medidas pendientes, en su mayor parte relacionadas con la salida de la crisis económica y la consiguiente generación de empleo. Las elecciones de hoy en Andalucía y en Asturias cierran por completo el ciclo electoral y abren un dilatado período sin confrontaciones de esta índole. Y el Partido Popular, sean cuales sean los resultados de hoy, gozará de la máxima cuota de poder territorial que jamás tuvo organización política alguna en la larga etapa democrática, por lo que no podrá alegar insuficiencia de medios a la hora de instaurar soluciones rotundas a los problemas. Este próximo jueves, los sindicatos plantean un pulso al Gobierno con una huelga general que difícilmente tendrá un alcance suficiente para forzar al Gobierno a reconsiderar el rumbo. Las elecciones del 20-N, que dieron plena legitimidad a este Gobierno para realizar la dolorosa cirugía necesaria, están todavía muy cerca para imaginar que la opinión pública ha mudado tan drásticamente en ese período. Al día siguiente, el viernes, el Consejo de Ministros dará luz verde al anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, que incluyó el recorte definitivo del ejercicio, con nuevos sacrificios para conseguir a fin de año el doloroso déficit del 5,8% del PIB que nos hemos comprometido a alcanzar. El final de marzo será también escenario tasado de inexorables medidas económicas. Antes de que concluya el mes, los bancos españoles deberán presentar al supervisor sus planes para cumplir con los saneamientos del ladrillo. Y asimismo, Industria deberá decidir la inoportuna subida de la luz, obligada por sentencia de los tribunales y por la propia fuerza del creciente déficit tarifario. A partir de ahí, el Gobierno ya podrá volcar todas sus energías en cumplir los objetivos que se ha marcado. Con la confianza de que pronto se vislumbren las primeras luces en el horizonte.

Pragmatismo y soberanismo

Convergència Democràtica de Catalunya, la principal fuerza nacionalista de la comunidad autónoma y miembro principal de la coalición CiU, actualmente en el poder en la Generalitat, celebra este fin de semana su 16º Congreso entre el pragmatismo suscitado por el hecho de tener que gobernar en plena crisis económica y una pulsión soberanista creciente. Vertiente independentista que, según la propia formación, arranca de la frustración de la reforma estatutaria y se manifiesta en la reivindicación del pacto fiscal. En este congreso, que consolida el liderazgo de Artur Mas, Oriol Pujol, hijo del fundador de CiU y futuro secretario general del partido, ha reiterado la concepción de la fuerza política como un «movimiento» que no sería ni de derechas ni de izquierdas, ni independentista ni no independentista. Pese a ello, el discurso de fondo, en un marco ambiental cargado de «esteladas» -la bandera de Cataluña independiente-, es crecientemente soberanista. La coyuntura actual, realmente crítica, parecer recomendar que las preocupaciones políticas se centren en procurar la salida de la recesión, designio en el que CiU necesita al PP, que le concede estabilidad en Cataluña. No tendría demasiado sentido que esta cooperación fecunda sirviese a la postre para intensificar mensajes disolventes del Estado español.

IDEAL

DIARIO REGIONAL DE ANDALUCÍA

Director General: Diego Vargas García

Director:
Eduardo Peralta de AnaSubdirector:
Félix L. RivadullaMesa de redacción multimedia:
Miguel Martín Romero (Culturas); Juan Jesús Hernández Hernández (Información); Quico Chirino (Granada); Javier Fuentesbello (Editor Granada y Fin de Semana); Justo Ruiz Barroso (Deportes); Rafael Lamelas (Editor multimedia); Ramón L. Pérez (Editor Gráfico)Delegaciones:
Ángel Iturbide Elizondo (Delegado Almería); José Luis Adán López (Delegado Jaén)Directora de RR.HH.:
María A. Cañete Comba
Director de Marketing:
Pablo Madina Martínez
Director Técnico:
Antonio C. Castillo JiménezComercializadora de Medios
Director gerente: Jesús Torre Ramos

Sostenibilidad 'versus' calidad de la sanidad pública

ANTONIO HERNÁNDEZ JEREZ

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO DE MÉDICOS

El modelo sanitario actual es insostenible. Es una necesidad acuciante buscar fórmulas válidas para la financiación o refinanciación del gasto sanitario público

A veces se confunde, pero los ciudadanos no tenemos derecho a la salud sino a la protección de la salud, tal y como recoge el artículo 43 de la Constitución. Dicho sea de paso, no estamos ante un derecho fundamental, aunque para su ejercicio hace falta recurrir a otros derechos que si gozan de tal carácter, como el derecho a la vida, a la integridad física y el respeto a la dignidad humana. La protección a la salud se concreta en el derecho subjetivo a la asistencia sanitaria, que debe ser pública, con vocación de universalidad (engloba a todos los colectivos de la población) y gratuita, aunque no siempre sea así.

Afirmar que el modelo sanitario actual es insostenible es una obviedad, a pesar de que no todos están dispuestos a reconocerlo. Desde numerosos frentes (profesionales, políticos, periodísticos y sociales) se defiende que los recortes no deben afectar a la sanidad pública, uno de los principales embajadores de la España moderna y pilar del Estado de bienestar. Sin embargo, la presión internacional para reducir el déficit público ha propiciado la aplicación de recortes indiscriminados en todas las partidas presupuestarias, incluyendo las sanitarias. No se ha aportado ningún argumento clínico o de eficiencia del sistema para justificar tales recortes, tan solo el fiscal o presupuestario, por lo que termina afectando a la salud de los pacientes-usuarios de la sanidad pública. ¿Significa eso que los ajustes, por otro lado imprescindibles para reducir el déficit público, deben excluir a la sanidad? Seguramente no, pero hay que hacerlo con exquisito rigor para no mermar la calidad y sin traspasar determinadas líneas rojas, entre ellas las prestaciones sanitarias básicas, que deben quedar al margen.

Por tanto, una necesidad acuciante es buscar fórmulas válidas para la financiación o refinanciación del gasto sanitario público. A pesar de dedicarle menos presupuesto que otros países europeos (65.000 millones de euros, alrededor del 6% del PIB), España cuenta con el mejor sistema sanitario y una excelente valoración internacional. Sin embargo, la crueldad de la situación económica actual no tiene misericordia con la realidad del sistema. Los ideales de sanidad pública, universal y gratuita no los pone nadie en entredicho, pero una cosa es la razón teórica y otra la razón práctica.

La sanidad pública tiene un déficit de casi 16.000 millones de euros (de los que dos tercios corresponden a medicamentos y tecnología hospitalaria), atribuible a los responsables de su gestión, es decir, a las autonomías. Retrasar el pago a los proveedores no es una fórmula eficaz de lucha contra el déficit. Desde que las comunidades autónomas asumieron sus competencias en materia sanitaria, el gasto ha sido desproporcionado y el Ministerio de Sanidad

no ha conseguido coordinar el funcionamiento de 17 sistemas sanitarios diferentes, lo que pone en riesgo la igualdad de contenidos, la equidad en el acceso y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. A pesar de que el 65% de las partidas presupuestarias de las comunidades autónomas se destina a sanidad y servicios sociales, hay falta de previsión pues se presupuesta menos de lo que se va a gastar y el gasto sanitario crece a un ritmo superior al del PIB, efecto que se acentúa en épocas de recesión, como está a punto de ocurrir por segunda vez en muy poco tiempo. El gasto aumenta ya que somos más, vivimos más años, contraemos más enfermedades crónicas, hay más enfermos pluripatológicos y consumimos más recursos. Dotar de más presupuesto para sanear este déficit es impensable en el momento económico actual. La simple aplicación de recortes y medidas de ahorro, sin revisar su propio concepto y mejorar su eficiencia, conduce inexorablemente a un deterioro de la calidad asistencial.

Solo hay dos caminos: o se gestiona mejor el presupuesto asignado (eficiencia en el ahorro y en la distribución del gasto) o se buscan ingresos adicionales. Se ha insistido sobre todo en lo primero, pero todavía no se ha optimizado la gestión de los recursos y sigue habiendo importantes bolsas de ineficiencia que, con la estructura rígida del sistema, son difíciles de corregir. Además, se ha tratado de reducir la factura farmacéutica y de productos sanitarios (en algunos casos se ha rozado la escasez en

centros de salud y hospitales), se ha recortado el sueldo de los profesionales y reducido personal y servicios mediante ajustes de plantillas, cierre de consultas, quirófanos, etc. Todo ello conlleva un aumento de las listas de espera, masificación de los centros y un incremento del número de pacientes por médico. Todas esas medidas no solo no contribuyen a resolver el problema sino que han probado ser insuficientes por si mismas y, además, deterioran la calidad de la asistencia sanitaria, por mucho que sus responsables lo nieguen.

El segundo camino consiste en recurrir a ingresos adicionales, asunto difícil en los tiempos que corren, y que en todo caso deberían ser finalistas para una mejor sostenibilidad del sistema (el dinero recaudado para sanidad debe ir solo a sanidad, no a otros fines). También se puede recurrir a los impuestos que gravan el tabaco y alcohol o al denominado céntimo sanitario de los carburantes.

Entrando en el campo de la utopía, los políticos deberían buscar fórmulas consensuadas y realistas para dar solución a los problemas estructurales de la sanidad, buscar vías de financiación suficientes y sostenibles que nos permitan mantener el nivel de excelencia del que hasta hace muy poco disfrutaba nuestra sanidad pública, una de las pocas cosas de las que podía presumir España en todo el mundo, incluso en el desarrollado.



EFE